

CONTRACORRIENTE

Capos muertos, guardias abatidos, civiles asesinados y nada de investigación

MAITE AZUELA

La reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias *El Mencho*, se ha presumido desde las tribunas oficiales como una victoria definitiva e histórica del Estado sobre el crimen organizado. Sin embargo, el estruendo de los aplausos no logra silenciar una realidad trágica y alarmante que quedó al descubierto este fin de semana: el operativo cobró la vida de 28 elementos de las fuerzas armadas, entre militares y agentes de la Guardia Nacional.

Para entender la magnitud de estas 28 bajas oficiales en un solo evento, es imperativo revisar cómo operan normalmente nuestras corporaciones castrenses frente a los civiles. De acuerdo con el documento técnico *Análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las fuerzas armadas*, elaborado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, la letalidad militar suele ser abrumadoramente asimétrica y se ha mantenido como una política de Estado ininterrumpida a través de las últimas administraciones.

Durante la mal llamada “guerra contra el narco”, de Felipe Calderón, la Sedena registró una tasa de 19.4 civiles fallecidos por cada militar que perdía la vida en un enfrentamiento. Con la llegada de Enrique Peña Nieto, la proporción se ubicó en 12.9 civiles abatidos por cada soldado. Lejos de erradicarse, esta tendencia letal continuó con Andrés Manuel López Obrador, donde la Sedena promedió 14.4 civiles muertos por cada baja militar.

Si la estrategia no cambia, podemos esperar que por cada militar caído en este sexenio, el Estado pueda tener un saldo de al menos 15 civiles abatidos. La evidencia es contundente: el diseño de las fuerzas armadas está hecho para aniquilar, no para detener.

La muerte de 28 uniformados en un despliegue demuestra que, cuando el Estado quiere aniquilar a un capo de alto perfil para colgarse la medalla política, está dispuesto a asumir sin titubeos el altísimo costo de sangre de sus propias tropas. Pero cuando el gobierno simplemente quiere “jugar” a la seguridad pública, desplegando militares en las calles, quienes terminan pagan-

do el precio de esa letalidad descontrolada son los ciudadanos.

¿Por qué apostar por un operativo de exterminio que cuesta la vida de decenas de agentes y no por una captura táctica e inteligente que permita dismantelar la red de complicidades a través de los tribunales?

Un capo abatido es un archivo que se cierra para siempre. Gracias al trabajo periodístico reciente de medios como EL UNIVERSAL, hoy sabemos lo que el Estado preferiría mantener oculto bajo los escombros y el humo de la metralla. En la casa de “El Mencho” se encontraron indicios delictivos invaluable, particularmente listas de nómina. En esa “narconómina” quedaron registrados los pagos a sus pistoleros, los sobornos sistemáticos a diversas instituciones de gobierno y hasta las transferencias para pagar los narcorridos del grupo musical “Los Alegres del Barranco”.

Si Oseguera Cervantes hubiera sido capturado con vida y presentado ante la justicia, el proceso judicial habría provocado un sismo en las estructuras del poder. Se habría visto obligado a revelar los nombres de los mandos militares, gobernadores, alcaldes y empresarios que cobraban en su nómina. Habría tenido que explicar cómo se construye un imperio criminal en 20 estados con la ceguera simulada de la autoridad.

Pero el sistema prefiere los trofeos ensangrentados a la verdad judicial. La estrategia no está diseñada para construir carpetas de investigación ni para llevar a los cómplices de cuello blanco ante un juez. A las fuerzas armadas lo que les interesa es matar para no investigar. Prefirieron sacrificar a 28 de sus elementos en una cacería brutal que enfrentar la incomodidad de un juicio donde el principal acusado terminara siendo el propio Estado mexicano. ●

—@MaiteAzuela

